



RESOLUCIÓN No. SSPD - 20184010000335 DEL 04/01/2018

“Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa”

EL DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5 del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20171300104825 de 2017, la Ley 1437 de 2011 y

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *“se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que *“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007”*.

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300104825 de 29 de junio del 2017, delegó en la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Que mediante la Resolución No. SSPD 20174010138905 del 10 de agosto de 2017, esta Superintendencia decidió DESCERTIFICAR al municipio de FLORIDABLANCA en el departamento de SANTANDER, respecto de la vigencia 2016, por no haber acreditado el requisito relacionado con el acuerdo de subsidios y aportes solidarios para la vigencia respectiva, ajustado a la Ley 1450 de 2011.

Que la Resolución No. SSPD 20174010138905 del 10 de agosto de 2017, fue notificada personalmente el 29 de agosto de 2017.

Que el ente territorial interpuso recurso de reposición contra la decisión de descertificación mediante radicado No. 20175290736662 del 8 de septiembre de 2017, el cual se resolvió a través de la Resolución No. SSPD 20174010216005 de 3 de noviembre de 2017, confirmando la descertificación.

Que la Resolución No. SSPD 20174010216005 de 3 de noviembre de 2017, se notificó electrónicamente el 14 de noviembre de 2017.

Que mediante radicado No. 20175291007452 de 24 de noviembre de 2017, el municipio de Floridablanca presentó solicitud de revocatoria de la resolución inicial de descertificación y de la que resolvió el recurso de reposición confirmando dicha decisión.

2. ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD DE REVOCATORIA

En primer término, el solicitante realiza un recuento de los hechos que conforme a su criterio resultan relevantes dentro del proceso de certificación del SGP – APSB adelantado al municipio de Floridablanca respecto de la vigencia 2016, desde la expedición de las resoluciones objeto de solicitud, hasta los argumentos que conllevaron a la descertificación, los cuales disiente por cuanto estima dio cumplimiento al requisito que fundamento tal decisión, hechos que son abordados a lo largo de este acto administrativo.

Acto seguido, el Alcalde expone las consideraciones que a su juicio consienten la revocatoria directa de las decisiones impugnadas, en los siguientes términos:

“CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

En el presente caso estamos frente a la afectación de una persona jurídica de naturaleza pública que es el Municipio de Floridablanca viéndose perjudicada con la decisión tomada por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios al no proceder a certificar al ente territorial en relación con la administración de los recursos del sistema General de Participaciones para agua potable y Saneamiento Básico respecto a la vigencia 2016 basándose en un argumento que excede los límites de lo

razonable careciendo de un sustento válido, ya que este Municipio efectivamente realiza el cobro del porcentaje del servicio de aseo y siempre ha estado al tanto de cumplir con las exigencias requeridas.

Ahora bien, si miramos que para este tipo de actuaciones administrativas se debe tener en cuenta lo estipulado en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 siendo correcto citarlo: "Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad". Al momento de que la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios DESCERTIFICARA al Municipio de Floridablanca sin lugar a duda infringe el principio fundamental de eficacia **"...las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa..."**

Claramente el precepto normativo enunciado busca que las autoridades adopten criterios basados en la efectividad del derecho y no se enfrasquen en situaciones que conlleven al retraso de toma de decisiones que para el caso en particular resultaba de gran importancia, ya que la administración de estos recursos por parte del Municipio permite una mejor Planeación en lo que tiene que ver con el mejoramiento del servicio público de agua potable y Saneamiento básico para la población Florideña.

Aunado a lo anterior, cabe anotar, que resulta contradictorio la decisión tomada por la Superintendencia toda vez que si bien es cierto el Municipio de Floridablanca fue descertificado para la vigencia 2015 no fue por el incumplimiento del requisito de Aplicación de la metodología establecida por el Gobierno Nacional para asegurar el equilibrio entre los subsidios y servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo si no por otros requisitos exigidos, resultando intempestivo que en esta oportunidad se descertifique por un requisito que en vigencia anterior se calificó de manera satisfactoria aclarando que en esta oportunidad fue reportado en las mismas condiciones, encontrándonos frente a la vulneración del Principio de la Confianza Legítima donde la Corte Constitucional Colombiana, en la Sentencia T-020 del año 2000, indica que la "la confianza legítima es un principio que (...) deriva de los postulados constitucionales de seguridad jurídica, respecto al acto propio y la buena fe y, busca proteger al administrado frente a las modificaciones intempestivas que adopte la administración, desconociendo antecedentes en los cuales aquél se fundó para continuar en el ejercicio de una actividad o en el reclamo de ciertas condiciones o reglas aplicables a su relación con las autoridades." (cita). Por esta línea ha discurrido

la Honorable Corte Constitucional, quien igualmente en jurisprudencia T-642 del 2004, señala dicho principio en los siguientes términos: "Es éste un principio que debe permear el derecho administrativo, el cual, si bien se deriva directamente de los principios de seguridad jurídica (Arts. 1o y 4o de la C.P) de respeto al acto propio y la buena fe (artículo 83 CP), adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se imponen en la relación entre la administración y el administrado. Es por ello, que la confianza en la administración, no sólo es éticamente deseable sino jurídicamente exigible. **Este principio se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses público y privado, cuando la administración ha creado expectativas favorables** para el administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente condiciones. Por (o tanto, la confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la administración, es digna de protección y debe respetarse"² (cita) (Negrilla y subrayado fuera de texto original).

Así pues, en consideración al principio de confianza legítima, derivado a su vez de los principios constitucionales de la Seguridad jurídica y la Buena fe, la autoridad administrativa en este caso la SSPD, debe ser coherente en la actuación que ha venido surtiendo, garantizando una estabilidad y durabilidad en las situaciones generadas, ya que no puede calificar de manera ex abrupta el incumplimiento de un requisito que en vigencia anterior fue reportado en las mismas condiciones y calificado satisfactoriamente, por lo cual la SSPD, cae en un yerro interpretativo de la figura que estamos aludiendo, al indicar sin señalar fundamento jurídico alguno que: "la Corte ha sostenido respecto la confianza legítima, que el administrado no es titular de un derecho adquirido, sino de una mera expectativa". Lo cual le da asidero al solicitante, ya que lo que se está reclamando no es la titularidad de ningún derecho, sino la sorprendente calificación de incumplimiento del requisito (reporta en el SUI el Acuerdo de Aprobación de los porcentajes de subsidios y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complementa o sustituya) cuando en vigencia anterior fue un requisito CUMPLIDO.

Es importante mencionar la noción de revocabilidad de los actos administrativos, al afirmar que el obrar estatal siempre se encuentra frente a situaciones y circunstancias cambiantes porque de modo permanente e incesante tiene que ser capaz de adaptarse a ellas para alcanzar el bienestar general y demás cometidos del interés público. Por ello se reconoce que la propia autoridad creadora de una situación o relación jurídica tiene la facultad para suprimirla o modificarla cuando en algún momento posterior se produce una incompatibilidad entre el acto y el interés, por ende estamos frente a un acto administrativo fundamentalmente revocable."

3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL ENTE TERRITORIAL

3.1. De la revocatoria directa en general

La administración pública cuenta con funciones para regular sus actuaciones y hasta la posibilidad de autocontrol sobre la propia actividad pública, al punto que se le permite la extinción de un acto administrativo cuando concurren unas causales específicas previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - C.P.A.C.A.

En ese orden, es de anotar que la revocatoria de los actos administrativos es uno de los privilegios estatales, mediante el cual la administración está facultada a petición de parte o de manera oficiosa, para suprimir del ordenamiento jurídico un acto previamente expedido por ella, ceñido a la regulación prevista en el Capítulo IX del Título III del C.P.A.C.A., artículos del 93 al 97.

En este entendido, los actos administrativos deberán ser revocados de oficio o a solicitud de parte, únicamente en los siguientes casos:

“ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. *Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley.*
2. *Cuando no están conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
3. *Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.*

Así las cosas, la norma es clara al establecer cuándo y cómo ha de proceder la administración en el evento de la revocatoria directa, considerada esta, como un mecanismo excepcional de impugnación de los actos administrativos consagrado por el legislador.

Señalado lo anterior, es pertinente pasar a revisar las causales de revocatoria directa invocadas por el Alcalde del municipio de Floridablanca y su procedencia.

3.2 De la primera la causal primera invocada por el ente territorial ***“Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o la Ley”***

El artículo 94 del C.P.A.C.A conforme a lo advertido con antelación, señala un límite respecto de la procedencia de la revocatoria relacionado con esta causal, que se circunscribe al haber hecho uso de los recursos de que dicho acto sea susceptible.

En ese orden y teniendo en cuenta que el solicitante demanda la revocatoria de las dos resoluciones expedidas dentro del proceso de certificación de la vigencia 2016, este Despacho estima oportuno analizar la procedencia de la revocatoria respecto de esta causal, a la luz de cada una de las decisiones atacadas.

3.2.1 De la procedencia de la causal primera frente a la Resolución No. SSPD 20174010138905 del 10 de agosto de 2017.

En atención a los argumentos presentados por el Alcalde de Floridablanca, según los cuales la Resolución No. SSPD 20174010138905 del 10 de agosto de 2017, debe ser revocada por haber sido proferida en contravía de la Constitución y la Ley, el Despacho procede a examinar la procedencia de lo solicitado y para ello debe hacerse referencia expresa a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1437 de 2011, el cual señala:

"ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial." (Negrilla fuera del texto).

En consecuencia, se tiene que no podrá formularse revocatoria directa por la primera causal (*Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley*) cuando el peticionario hubiese ejercido los recursos procedentes contra el acto cuya revocatoria directa pretende.

Para el caso concreto, el Despacho precisa que el municipio de Floridablanca mediante radicado No. 20175290736662 del 8 de septiembre de 2017, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20174010138905 del 10 de agosto de 2017, el cual fue resuelto a través de la Resolución No. SSPD 20174010216005 de 3 de noviembre de 2017, decisión notificada el 14 de noviembre de 2017.

Así las cosas, la solicitud presentada por el Alcalde de Floridablanca se torna improcedente, como quiera que contra la mencionada resolución que resolvió el proceso de certificación, el

petionario interpuso el recurso de reposición que resultaba admisible en el trámite administrativo en comento.

3.2.2. De la procedencia de la causal primera frente a la Resolución No. SSPD 20174010216005 de 3 de noviembre de 2017.

En cuanto a la procedencia de la causal primera respecto de la Resolución No. SSPD 20174010216005 de 3 de noviembre de 2017, este Despacho estima que la misma permite su estudio, como quiera que, de un lado, la decisión que resolvió el recurso de reposición no es susceptible de ningún recurso, ya que la decisión de descertificación sólo admite reposición más no apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del C.P.C.A. y de otro, por cuanto la resolución que nos ocupa constituye un acto definitivo, y en esencia la revocatoria directa solo procede contra actos administrativos definitivos.

Al respecto el Consejo de Estado¹ señaló *“(...) la interpretación sistemática del conjunto normativo que regula la figura de la revocación directa de los actos administrativos permite inferir que ella solo procede contra actos administrativos definitivos”*.

Así pues, se considera oportuno proceder a verificar si esta decisión se ajustó a la normatividad que rige la materia, para determinar si le asiste o no la razón al municipio en el caso puntual.

Sea lo primero advertir, que revisado el expediente se encontró que el escrito de contradicción interpuesto, se resolvió mediante acto administrativo motivado (objeto de análisis) proferido dentro del plazo legal y notificado electrónicamente por solicitud del recurrente.

De igual manera, se procedió a revisar la resolución que resolvió el recurso, observando que los argumentos del ente territorial, así como las pruebas allegadas con ocasión de la reposición, fueron atendidos y evaluados, sin embargo, se determinó que los mismos no fueron conducentes a fin de superar el reproche que fundamentó la descertificación, por lo cual se confirmó la decisión, como quiera que el acuerdo municipal reportado por el municipio para acreditar el requisito relacionado con el *“Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva (...)”*, no se halla ajustado a la Ley 1450 de 2011, condición que la norma demanda para su acreditación, situación que quedó evidenciada incluso, con las mismas pruebas que la entidad territorial allegó en su momento.

Se colige entonces que, esta entidad de no encontrar acreditado un requisito bajo las condiciones y términos que la norma establece, no puede proceder a certificar al municipio o distrito sujeto del proceso, ya que lo que corresponde en ese evento, es la descertificación,

¹ Consejo de Estado. Radicación número: 11001-03-06-000-2008-00064-00(R). 26 de noviembre de 2008.

como ocurre en el presente caso, habida cuenta que se confirmó el incumplimiento del requisito predicado inicialmente, lo cual derivó a su vez en la confirmación de la descertificación.

En consecuencia, encuentra esta Superintendencia que la Resolución No. SSPD 20174010216005 de 3 de noviembre de 2017, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el ente territorial, se ajustó a derecho en todas sus partes, dado que respetó y acató las normas que gobiernan la materia.

3.3 De la tercera causal invocada por el ente territorial “Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

Cuando la Ley regula la revocatoria directa, establece límites en cuanto a la primera causal, como se revisó en el acápite 3.2 de este acto administrativo, y frente a todas, cuando haya operado la caducidad para su control judicial.

En el caso que nos ocupa, la caducidad para el control judicial de la decisión de descertificación no ha operado, por lo cual el estudio la causal “Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”, se hará respecto de las dos resoluciones sobre las cuales se solicita la revocatoria y que entrañan en sí mismas la descertificación.

Pues bien, de acuerdo con lo señalado por el solicitante, las decisiones de descertificación causan un agravio injustificado al municipio de Floridablanca en su condición de persona jurídica de naturaleza pública, frente a lo cual se debe iniciar señalando que cada ente territorial para obtener la certificación del SGP - APSB, tiene la obligación de cumplir con las exigencias que taxativamente establece la norma, dentro del término fijado para el efecto.

En este orden de ideas, el municipio como administrado debe dar cumplimiento a las normas que rigen la materia para ser certificado, teniendo en cuenta que el Decreto 1077 de 2015, dispone expresamente las consecuencias de no acreditar tales requisitos, como lo es la descertificación.

Por su parte, a esta Superintendencia le asiste la obligación legal de verificar para cada vigencia el cumplimiento de los requisitos que la norma señala por parte de todos los municipios y distritos con la debida observancia del marco jurídico que rige la actuación administrativa, a fin de proferir la decisión que decide sobre la certificación del SGP – APSB.

Así las cosas, y dado que en el presente asunto el municipio no cumplió a cabalidad con todos los requisitos que la norma demanda para acceder a la certificación, no es de recibo predicar que dicha decisión cause un agravio injustificado a la entidad territorial, habida cuenta que la misma tiene asidero en el incumplimiento del ente territorial frente a la ley, como quedo plenamente demostrado, y además, porque el proceso de certificación reviste una función meramente administrativa y no sancionatoria, conforme a lo anterior, el presente proceso no

tiene como fin establecer o determinar responsabilidades por la violación al régimen de servicios públicos e imponer una consecuente sanción, sino que esta Superintendencia se limita a evaluar la información que el municipio reporta para acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 1077 de 2015, lo que a la postre deriva en la certificación o descertificación.

Es así, como de llegarse a la conclusión de que el municipio no cumplió con los requisitos establecidos en la ley, los recursos del SGP – APSB destinados inicialmente al municipio descertificado, se transfieren al departamento respectivo para que este los administre, siendo el encargado de realizar todas las gestiones necesarias para garantizar la prestación eficiente de los servicios esenciales de agua potable y saneamiento básico en todo el municipio.

Por las razones expuestas, dicho proceso no puede entenderse como una actuación sancionatoria que implique un daño o detrimento patrimonial para el municipio recientemente descertificado, toda vez que como se ha sostenido, la entidad territorial no es privada de los recursos que le corresponden para garantizar la debida prestación de los servicios públicos domiciliarios.

En suma, estima este Despacho que, en el caso puntual no se halla configurado el agravio injustificado invocado respecto de las Resoluciones Nos. SSPD 20174010138905 del 10 de agosto de 2017 y 20174010216005 de 3 de noviembre de 2017, como causal para acceder a la solicitud de revocatoria deprecada, de conformidad con los motivos expuestos.

3.4 De los argumentos transversales del ente territorial

Manifiesta el Alcalde de Floridablanca que resulta contradictorio que en esta oportunidad se descertifique al municipio por un requisito que en la vigencia anterior se calificó de manera satisfactoria y que, en consideración al principio de confianza legítima, derivado a su vez de los principios constitucionales de seguridad jurídica y buena fe, la SSPD debe ser coherente en la actuación que ha venido surtiendo, garantizando una estabilidad y durabilidad en las situaciones generadas.

Frente a dicho reparo, y en primer término, se debe insistir en que esta entidad tiene la obligación de evaluar los requisitos para acceder a la certificación de acuerdo con lo establecido en las normas que rigen este proceso, y dicha evaluación debe efectuarse incólume cada vigencia, en este entendido, de encontrar la Superintendencia que un requisito no se cumple a cabalidad, le asiste el deber de efectuar el reproche respectivo y decidir conforme a las consecuencias que para estos casos la Ley prevé.

No obstante, en gracia de discusión y con ocasión de las aserciones del solicitante, vale aclarar, que en el presente caso quedó evidenciado como el Acuerdo Municipal No. 10 de 2015 reportado por el municipio en el SUI para la vigencia 2016, transgrede la Ley 1450 de 2011,

falencia que se advirtió después del análisis de dicho acto administrativo a la luz de la norma (Ley 1450 de 2011), por lo cual no resulta procedente que el ente territorial pretenda que esta entidad omita tal situación.

Ahora bien, recordemos que el Acuerdo Municipal en comento, utilizó para el servicio de aseo la clasificación de pequeño y grande productor, la cual claramente no se encuentra regulada en la Ley 1450 de 2011, norma que establece los porcentajes máximos de subsidios y mínimos de contribuciones para los estratos y usos que la misma señala, no admitiendo para estos efectos el pequeño y gran productor, y si bien, el solicitante menciona como fundamento el Decreto 2981 de 2013, es importante precisar, que dicha la clasificación (pequeño y grande generador), es para efectos de catalogar al suscriptor no residencial de conformidad con la cantidad de residuos sólidos que genere, como el artículo segundo del Decreto en comento dispone:

“Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos de este decreto, se adoptan las siguientes definiciones:

(...)

Pequeños generadores o productores: *Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen menor a un (1) metro cúbico mensual.*

(...)

Grandes generadores o productores: *Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen igual o superior a un metro cúbico mensual.”*

Aunado a lo anterior, se debe subrayar que la clasificación efectuada por el municipio para la materia que nos ocupa, no es de recibo, en atención a que en el grupo de pequeños productores pueden existir usuarios comerciales e industriales y así mismo en el grupo de grandes productores, en ese entendido, no se encuentra ajustado a la norma que el municipio de Florida Blanca haya establecido el 45% de contribución para los pequeños productores porque aquellos usuarios comerciales integrantes de tal grupo no contribuirán mínimo con el 50% que la norma señala, incumpliendo la disposición citada (Artículo 125 de la Ley 1450 de 2011.), lo cual se soporta incluso con la facturación allegada por el municipio con el escrito de reposición, donde se evidencia para el uso comercial la aplicación de un porcentaje inferior al fijado por la Ley.

En este orden de ideas, no puede esta Superintendencia omitir tal situación y dar por cumplido el requisito objeto de inconformidad, cuando claramente no cumple las condiciones que la Ley establece para su acreditación, lo cual contrario a lo aducido por el solicitante es indiscutiblemente sustancial y no una mera formalidad como considera.

Adicionalmente, es imperioso aclarar que la certificación se obtiene con el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que el Decreto 1077 de 2015 dispone, no siendo de recibo el argumento según el cual resulta inequitativo que por un solo requisito se haya descertificado al municipio de Floridablanca, ya que la norma no prevé excepción alguna.

De otra parte, en lo referente a la confianza legítima que el Alcalde pone de presente, esta entidad reconoce que la misma debe ser observada en la actuación administrativa, sin embargo, es oportuno traer a colación que, en efecto, la misma reviste una expectativa, y que para ser jurídicamente protegida debe ser justificada y razonable.

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T – 306 del 2016, manifestó:

“Ahora bien, no toda expectativa se encuentra jurídicamente protegida. La confianza debe ser justificada y solo se protegen aquellas circunstancias “objetivas, plausibles, razonables y verdaderas que la motivan y explican, revistiéndola de un halo de credibilidad y autenticidad indiscutibles”[42]. En otras palabras, el principio de confianza legítima solo opera ante comportamientos justificados, razonables y genuinos, donde el particular tenga una expectativa justificada de que una situación de hecho o una regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente; y no cubre aquellas circunstancias en las cuales la Administración ha establecido con anterioridad que puede modificar la situación individual en cualquier tiempo”²[43].

De lo anterior, esta entidad considera en el caso que nos ocupa, de una parte, que el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, como regulación jurídica, desde su expedición se ha mantenido incólume, por lo que la administración municipal debió tomar las medidas convenientes y oportunas para que sus actos administrativos concuerden con lo fijado en la Ley, máxime cuando esta (la Ley) no requiere que se advierta su cumplimiento en cada vigencia y de otro, que no resulta razonable ni justificable, calificar como cumplido un requisito que a la luz de las normas no cumple con las condiciones para su acreditación.

En este entendido, no es sorprendente la calificación de tal requisito por parte de esta Superintendencia como lo señala el Alcalde, porque dicha exigencia legal efectivamente se incumplió y, por lo tanto, no puede atribuírsele una calificación diferente.

En definitiva, y en atención a las consideraciones expuestas en esta Resolución, no encuentra este Despacho configurada ninguna de las causales invocadas por el solicitante para que proceda la revocatoria, por lo cual no se accederá a la solicitud presentada por el municipio.

En mérito de lo expuesto, esta Superintendencia,

² [42] Sentencia T-437 de 2012. Cfr. VALBUENA HERNANDEZ, Gabriel. La defraudación de la confianza legítima. Aproximación crítica desde la teoría de la responsabilidad del Estado. Universidad Externado de Colombia. 2008, pág. 165.

[43] Sentencia T-437 de 2012.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - NO ACCEDER a la solicitud de revocatoria directa presentada por el municipio de FLORIDABLANCA – SANTANDER, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR personalmente de la presente resolución al representante legal del municipio de FLORIDABLANCA – SANTANDER, o a quien haga sus veces, haciéndole entrega de una copia de la misma y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



CARLOS ANDRÉS BERNAL CASAS

Director Técnico de Gestión de Acueducto y Alcantarillado (E)
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Vanessa Benavides – Contratista Grupo de Certificaciones e Información.
Revisó: Jasmin Acosta Jaimes-Funcionaria Grupo de Certificaciones e Información.
Aprobó: Olga Rocio Yanquen Caro – Coordinadora Grupo de Certificaciones.
Expediente: 2017401351600926E